

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Campeche por los Señores Domingo Diego, Joaquin Lanz y otros, contra el cobro que como derechos de oficina les hacen los CC. Capitanes de los puertos de Campeche y del Carmen, al arribo de varias embarcaciones.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez.

El Promotor fiscal dice: los Señores Joaquin Gutierrez y Compañia, D. Domingo Diego, D. Joaquin Lanz, D. Juan de la Caba-da, D. Manuel Sintas y D. Juan Ferreyro, como dueños los unos, y como consignatarios otros de las embarcaciones, bergantin goleta "Santa Rita," paylebot "Benita;" canoas, "Victoria," "Diana," "Amalia," "Siempre-viva;" y balandro "Vivi," demandan amparo á ese Juzgado con motivo de que las capitanías de puerto de este Estado les han cobrado y cobran cada vez que arriban las expresadas embarcaciones á dichos puertos, los derechos de oficina que establece el antiguo decreto de 22 de Abril de 1851, derogado en esa parte por el nuevo arancel. Pedidos los informes de la ley á las respectivas capitanías, es decir, á la de este puerto y á la del Carmen, la primera se limitó á reproducir en su totalidad el que habia emitido, cuando en Octubre del año próximo pasado se le mandó informar sobre una cuestion enteramente análoga á la presente, promovida por los Señores Joaquin Gutierrez y Compañia; y la del Carmen se redujo á manifestar: que por que hasta hoy no ha recibido disposicion alguna que le impida cobrar tales derechos de oficina, y por que supone vigente en ese puerto el decreto ó reglamento citado, los ha cobrado.

Los peticionarios hacen descansar la demanda, como se ve, en la violacion que su-

ponen hecha al artículo 14 de la Constitucion federal, dándose efecto retroactivo al reglamento referido; mas el fiscal no está muy de acuerdo con ese fundamento, porque aquel no solo no ha sido expedido con posterioridad al cobro de que se quejan, sino que reputándosele como se le reputa, derogado en la parte en que trata de los derechos de oficina, claro está que no puede surtir efecto alguno ni para lo futuro ni para lo pasado; y siendo esto así, no hay ataque posible al artículo 14 citado.

Sin embargo de lo dicho, el respetable juicio de la Corte Suprema de Justicia opino unánimemente en 22 de Octubre pasado, por que se otorgase el amparo en un caso idéntico al que nos ocurre, promovido por los Señores Gutierrez y Compañia. Esa resolucion que considera á un tiempo derogado el reglamento en cuestion en la parte de los derechos de oficina, y no comprendidos estos en las partidas relativas de ingresos del presupuesto actual, es un precedente que colocó al suscrito en el caso de hacer á un lado sus apreciaciones, y pedir como pudo, que con arreglo á aquella y con los propios fundamentos, se acuerde el amparo á los solicitantes mentados al principio.

De advertir es, al cerrar esta conclusion, que si ella se ha demorado, ha sido en razon de una comunicacion del C. Presidente de la República al Comandante principal de Marina del departamento del Norte, publicada en el número 296 del periódico oficial de éste Estado, y la cual se acompaña, por la que se dice: que se habian dictado providencias relativas á este asunto; cuyas providencias deseaba conocer el propio suscrito, y por lo que las espresaba con anuencia de los interesados, para de esa manera conciliar las dudas que le ocurrían.—Campeche, Mayo 20 de 1873.—José Gomez.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Campeche, Junio 5 de 1873.—Vistos estos autos de juicio de amparo promovido por los Señores Domingo Diego, Joaquin Lanz, Joaquin Gutierrez y Compañia, Juan de la Cabaña, Manuel Sintas y Juan Ferreyro, como dueños y consignatarios del bergantin goleta "Santa Rita," pailebot "Benita," canoas, "Victorio," "Diana," "Amalia," "Siempreviva" y balandro "Vivi," contra los CC. Capitanes de los puertos de este Estado que les cobran tres pesos cincuenta centavos por cada arribo de las embarcaciones expresadas; cuyo cobro lo creen contrario al artículo 14 de la Constitucion federal, por las razones en que fundan su ocurso dichos señores. Visto el informe emitido por los Capitanes del puerto, responsables del acto reclamado, alegando varias razones en favor de su procedimiento en el particular, y especialmente el de este puerto, que manifiesta haber cobrado los derechos de oficina de que habla la fraccion segunda del artículo sétimo del reglamento de 22 de Abril de 1851; y no los de puerto á que se refiere el artículo 14, capítulo cuarto del nuevo arancel de aduanas de 1º de Enero del año de 1872, y que empezó á regir el 1º de Julio del mismo año. Visto el pedimento del Promotor fiscal, sosteniendo la procedencia legal del recurso intentado, con todas las demas constancias que obran en autos. Considerando: que el artículo 14 ya citado del nuevo arancel de aduanas, suprime la disposicion del reglamento de 1851, pues dicho artículo deja exentos á los buques, de todos los derechos de puerto, con escepcion del practicafe cuando pidiesen práctico: que el derecho cuyo pago reclaman los quejosos, no está comprendido en las partidas relativas de ingresos que expresa el presupuesto de la federacion, fijado por la ley de 1º de Junio de 1872: que en consecuencia, cobrar el derecho referido, es violar la garantía que otorga el artículo 14 de la Constitucion de la República, con cuanto mas ver y conside-

rar convino, y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve lo siguiente: Primero: la Justicia de la Union ampara y protege á los Señores Domingo Diego, Joaquin Lanz, Joaquin Gutierrez y Compañia, Juan de la Cabaña, Manuel Sintas y Juan Ferreyro, contra el cobro que como derechos de oficina les hacen los CC. Capitanes de este puerto y el del Carmen, al arribo de las embarcaciones referidas. Segundo: en cumplimiento de los artículos 13 y 27 de la citada ley de amparo, sáquese copia de este fallo para su publicacion en el periódico oficial del Estado, remitiéndose los autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision. Así lo proveyó y firma el C. Lic. Pedro Montalvo, Juez de Distrito de este Estado.—Doy fé.—P. Montalvo.—Francisco Campos, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre 20 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Campeche, por los Señores Domingo Diego, Joaquin Lanz, Joaquin Gutierrez y Compañia, Juan de la Cabaña, Manuel Sintas y Juan Ferreyro, como dueños y consignatarios del bergantin goleta "Santa Rita," pailebot "Benita," canoas, "Diana," "Victoria," "Amalia," "Siempreviva," y balandra "Vivi" contra los Capitanes de puerto del Estado, por violacion del artículo 14 de la Constitucion de la República, con el hecho de seguirles cobrando tres pesos cincuenta centavos por cada arribo de las expresadas embarcaciones, como derechos de oficina, y con fundamento del artículo 17 del reglamento de 22 de Abril de 1851; siendo así que por el nuevo arancel de aduanas, artículo 14 del capítulo cuarto, que empezó á regir el 1º de Julio del año pasado, quedaron suprimidos los derechos de puerto establecidos por

ese reglamento, y considerando: que el derecho exigido á los quejosos no esta comprendido en la partida relativa del presupuesto de la federacion, fijado por la ley de 19 de Junio del año pasado; y que por el artículo 14 capítulo cuarto del nuevo arancel ya citado, quedan suprimidos todos los derechos de puerto, con escepcion del de practica cuando fuere pedido al práctico. Con fundamento de los artículos 14 y 101 de la Constitucion federal, se decreta: que por sus mismos y legales fundamentos se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Campeche en 5 de Junio del presente año, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á los Señores Domingo Diego, Joaquín Lanz, Joaquín Gutierrez y Compañia, Juan de la Cabada, Manuel Sintas y Juan Ferreyro, contra el cobro que como derechos de oficina les hacen los CC. Capitanes de los puertos de Campeche y del Carmen, al arribo de las embarcaciones referidas.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos, lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*M. de Castañeda y Ndjera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia. México, Noviembre 11 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Coahuila por el C. José María Urquiza como defensor del reo Julian Cedillo, contra el Presidente del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, por haberlo juzgado y sentenciado á la última pena.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal interino, en el juicio de amparo promovido por el defensor del reo Julian Cedillo condenado á la última pena por el doble homicidio cometido en las personas de Simon y Eleuteria Valdez, su estado supuesto que es el de alegar de buena prueba, dice: que durante el término probatorio de este juicio, el C. Gefe de Hacienda, que fungia como Promotor fiscal, no produjo prueba alguna, tal vez por no creerlo necesario; pues de la causa que se instruyó al reo, y cuyo testimonio obra de fojas 13 á 41 de este expediente, se desprenden datos que no dejan duda alguna de que Cedillo cometió el horrible crimen de que se le acusa, y de que éste está comprendido en la ley de 23 de Mayo de 1872. Para cerciorarse de esto, no se necesita recurrir á las diversas constancias de la causa y basta solo fijarse en la mas robusta de ellas, en la confesion de Cedillo, quien en su inquisitiva confiesa claramente haber dado muerte con una carabina de dos tiros á Simon y Eleuteria Valdez, el lunes 21 de Abril del presente año, en el punto llamado "el paso de Tata grande" (fojas 23 vuelta). No puede haber prueba mas convincente de la comision de este delito y de su autor, que esta confesion espontánea del delincuente agregada á las demas constancias de la causa, en las cuales está probado perfectamente el cuerpo del delito. Dice Cedillo en su declaracion, que Simon Val-